



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA  
POLICÍA NACIONAL

## O F I C I O

S/REF.: Expediente nº **001-058726**

FECHA: 25 octubre de 2021

ASUNTO: Varios extranjería

### DESTINATARIO:

El día 12 de julio de 2021 tuvo entrada en esta Dirección General una solicitud de información efectuada por \_\_\_\_\_ a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

*“En cuanto se refiere a adultos mayores extranjeros con edades comprendidas entre 55 años y 65, y mayores de 65 años, en el período del año 2010-2021:*

*“1. Número de autorizaciones de residencia concedidas a extranjeros extracomunitarios que se encontraban en situación irregular en España.*

*2. Tipo de autorización de residencia concedida. Esto es, razones humanitarias, circunstancias excepcionales, reagrupación familiar, etc;*

*3. Número de entradas irregulares de adultos mayores solos.*

*4. Número de repatriaciones.*

*5. Número de adultos mayores discapacitados.*

*Por favor, todos los datos anteriores segregados por edad, sexo, y nacionalidad”.*

Una vez analizada la petición este Centro Directivo dentro de su ámbito competencial, traslada la información disponible:

ENTRADAS IRREGULARES EXTRANJEROS MAYORES DE EDAD		
AÑO	ADULTO VARÓN	ADULTO MUJER
2017	22.288	2.388
2018	47.838	6.420
2019	24.306	3.915
2020	36.164	1.879
2021*	11.119	1.172

\* Los datos de 2021 están actualizados a 30 de junio, estos datos pueden sufrir variaciones cuando las plantillas amplíen información. La información relativa a entradas irregulares comprende todos los tipos de acceso ilícito, por lo que las llegadas en embarcaciones dedicadas a la inmigración irregular también se hallan computadas.

EXPULSIONES Y DEVOLUCIONES EXTRANJEROS DE MÁS DE 55 AÑOS				
AÑO	DEVOLUCIONES		EXPULSIONES	
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
2017	27	6	165	23
2018	32	3	122	21
2019	34	5	181	35
2020	11	5	112	16
2021*	9	1	74	13

\* Datos a 30 de junio de 2021

CORREO ELECTRÓNICO:

sggt.sggeneral@policia.es

C/ Rafael Calvo 33, 5ª Planta  
28071 – MADRID  
TEL.- 91 322 32 37  
FAX.- 91 308 32 36



No se facilitan los datos relativos a la nacionalidad de las personas llegadas y expulsadas o devueltas, ya que el conocimiento y difusión de estos parámetros podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares. Todo ello afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones, aplicándose en este caso el artículo **14.1c)** de la LTAIPBG, que dice: *"El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: c) Las relaciones exteriores"*.

Esta limitación ha sido avalada por propio el Consejo de Transparencia en numerosas ocasiones manifestando al respecto que *"dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, considera que el conocimiento de la restante información solicitada sí podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen. Asimismo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, las dificultades derivadas de su identificación podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida"*.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**



**Francisco Pardo Piqueras**